

PROBLEMA JURIDICO

1. ¿Debe vincularse en la apertura de la investigación, y en el procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Puertos al remitente o generador de la carga, al propietario, al poseedor, tenedor o conductor del vehículo de carga, cuando se debate la infracción del exceso de límites de peso permitido, si de acuerdo con lo establecido en el artículo 1010 del Código de Comercio, una de las obligaciones del remitente es indicar al transportador el peso, volumen y las características de las cosas a transportar. Por qué?
2. Es procedente la aplicación del principio in dubio pro reo cuando por descalibración comprobada de las básculas de pasajes existen dudas sobre la medición del peso bruto vehicular?
3. ¿Cuándo las pruebas son regular y oportunamente allegadas al proceso sancionatorio deben decretarse y practicarse aun de oficio por el ente de inspección, control y vigilancia o Superintendencia de Puertos y de Transporte, a fin de esclarecer la verdad y permitir el ejercicio del derecho de contradicción y el debido proceso?
4. De conformidad con el concepto MT-47112 de 15/08/08, emanado de la Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte, es viable jurídicamente aplicar la sanción de amonestación apoyado en el principio de razonabilidad que exige al juzgador valorar la gravedad de la infracción antes de aplicar sanciones desproporcionadas como la que prevé 700 smmlv?
5. En cumplimiento del principio de favorabilidad es procedente aplicar la sanción prevista en los artículos 18 y 21, literal D.13 de la Ley 1383 de 2010 por la cual se reforma la ley 769 de 2002, para los casos de exceso de carga teniendo en cuenta que el interés tutelado por el legislador es el mismo, como es la infraestructura, y que la norma se refiere a la circulación del medio y al transporte de carga?

SOLUCIÓN

1. Al existir la norma especial del Derecho Público Sancionatorio, que tiene la virtualidad de ser restrictivo y no se puede hacer extensivo, habrán de aplicarse dichas disposiciones a los sujetos que la misma norma preceptúa en cada caso concreto y en tal virtud, se considera que las disposiciones consagradas en el Código del Comercio a que usted alude, servirán de argumento probatorio en su momento en el respectivo debate procesal. Así queda absuelta su primera inquietud.

2. En cuanto al segundo interrogante es preciso señalar que en materia sancionatoria son admisibles todos los medios probatorios los cuales en su momento serán objeto de estudio y análisis por parte de la autoridad competente, quien le dará la validez o veracidad de la prueba.
3. Frente a la tercera inquietud, se estima que por expresa disposición constitucional, en el proceso deberán observarse y respetarse los derechos fundamentales de los sujetos procesales y, en el evento en que los mismos se consideren quebrantados, deberá procederse de conformidad en procura de sus intereses. Por su parte la autoridad competente (Superintendencia de Puertos y Transporte en su escrito), podrá decretar las pruebas que considere conducentes y pertinentes.
4. En lo que atañe al pronunciamiento efectuado por esta Asesora Jurídica a través de la comunicación MT-1350-2 47112 calendado el 15 de agosto de 2008, habrá de confirmarse su contenido, en razón a que sigue siendo de aplicación.
5. Respecto al principio de favorabilidad a que hace mención, para que se de aplicación a las normas contempladas en los artículos 18 y 21 literal D.13, de la Ley 1383 de 2010, este último artículo, modificadorio de su homólogo 131 de la Ley 769 de 2002, es preciso señalar que no es de aplicación, toda vez que se reitera, la aplicación de estas normas, por expresa disposición legal se da cuando quiera que se infrinjan normas de tránsito y cuya autoridad competente será el Organismo de Tránsito respectivo (recayendo en ella el cumplimiento del régimen normativo según los términos del artículo 7º del Código Nacional de Tránsito Terrestre), mientras que en materia de transporte además de existir las normas de rango legal que rigen dicho servicio público, también por expresa disposición legal, al ser su regulación competencia de este Ministerio, la competencia, para su inspección, vigilancia y control, radica única y exclusivamente en la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Por último y frente a la inquietud planteada en su comunicación radicada bajo el No. 2010-321-027367-2, respecto a qué se entiende por Tolerancia Positiva será necesario remitirse para el efecto a la literalidad de la norma, concretamente a la tabla contenida en el artículo 1º de la Resolución No. 01782 del 8 de mayo de 2009, que modifica el artículo 8º de la disposición reglamentaria 04100 de 2004.

[Concepto 20101340228551](#)